

Derecho Civil I
2019
Análisis de sentencias

Catrilef Hernández con Pesca Cisne S.A

Explicación previa

A continuación encontrará una sentencia judicial dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas al conocer de un recurso de apelación presentado en contra de un fallo dictado por un tribunal de primera instancia.

El recurso de apelación es una de las vías por las que un tribunal superior puede llegar a conocer y, eventualmente, modificar o anular una sentencia dictada por uno de los tribunales inferiores que se encuentran bajo su supervisión. Tiene por objeto que el tribunal superior (la Corte de Apelaciones, en este caso) revise los hechos que se probaron en el juicio, y luego aplique el derecho, reemplazando, modificando o confirmando el fallo de primera instancia.

Como en la mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales, usted encontrará en el fallo que se le presenta tres partes. Una parte expositiva, en que se explican las circunstancias del caso y la tramitación que precedió a la sentencia; una parte considerativa, en que se explican las razones de hecho y de derecho que llevaron al tribunal a decidir; y una parte resolutive, en que el tribunal comunica su decisión del asunto a las partes en particular, y al público en general. Cada una de estas partes ha sido indicada para facilitar su manejo del fallo.

Hechos del caso y puntos relevantes.

a. materia del fallo

El caso que se le presenta se pronuncia sobre la figura del “levantamiento del velo de la persona jurídica”. Desarrollada básicamente por la jurisprudencia, esta figura busca corregir ciertas situaciones en que la separación que existe entre una persona jurídica y sus creadores o administradores resulta abusiva, de manera que se prescinde de la persona jurídica en cuestión y se asume que quien sea

que estuviese tomando decisiones por ella ha actuado directamente en el caso. De allí la expresión de “levantar el velo”.

b. hechos del caso

Un grupo de pescadores, entre los que se encuentra el demandante Sr. Catrilef, fue contratado por la empresa Pesca Cisne S.A para formar parte de un buque pesquero industrial que emprendería un largo viaje de pesca en aguas internacionales.

El barco, propiedad de la empresa Alcimar S.A era comandado por el Capitán May, empleado de Alcimar.

Una vez en aguas internacionales, el capitán May ordenó a la tripulación que iniciara maniobras de pesca respecto de especies protegidas, y, además, les ordenó ingresar a aguas australianas para terminar la faena, en contravención de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

A poco andar, el barco fue sorprendido por las autoridades portuarias australianas, que lo condujeron a puerto y arrestaron a toda la tripulación.

Los pescadores chilenos arrestados fueron sometidos a juicio, y hallados culpables de distintos delitos en Australia, siendo condenados a la expulsión del país con prohibición de regreso.

Una vez en Chile, presentaron una demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de la empresa Pesca Cisne S.A, que los contrató, con el fin de que esta respondiese de las imprudentes acciones del capitán May, y de los perjuicios ocasionados a los trabajadores a consecuencia de estas.

c. controversia entre las partes

Ante la demanda del Sr. Catrilef y sus colegas, la empresa Pesca Cisne S.A contestó que no podía responder de lo ocurrido, ya que el capitán May era empleado de una empresa diferente (Alcimar), que era también la dueña y responsable del barco. En su defensa, indicó que su rol era el de una mera gestora de “recursos humanos”, y simplemente había actuado de mediadora entre la empresa pesquera y los trabajadores.

En contra de esta postura, los pescadores argumentaron que Pesca Cisne S.A es una empresa totalmente dependiente de Alcimar, de manera que no resulta justo argumentar que ambas empresas son independientes.

d. instrucciones

Identifique y analice la respuesta dada por el tribunal a la controversia de las partes.

Al hacerlo, considere especialmente los argumentos referidos a este punto, que se encuentran contenidos hasta el considerando 15 de la sentencia que se le presenta.

Fallo

Punta Arenas, veintisiete de marzo de dos mil ocho.

PARTE EXPOSITIVA

(La presente es una sentencia de apelación, es decir, se dictó para enmendar un fallo anterior. De acuerdo al artículo 170 inciso final del Código de Procedimiento Civil, las cortes de apelaciones están facultadas para reproducir la exposición de circunstancias, o parte expositiva, que haya hecho el fallo de primera instancia cuando éste cumpla con todos los requisitos con que debe cumplir un fallo de primera instancia.

Como se ve a continuación, esto es precisamente lo que ocurrió en este caso).

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de los fundamentos sexto y séptimo, que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:

PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que a fs. 793 y sgtes., el abogado Luis Alberto Díaz Coñuecar interpone recurso de apelación en contra de la sentencia escrita a fs. 776 a 792, dictada el 26 de septiembre de 2007 por la Magistrado titular del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, y esgrime para ello los siguientes fundamentos: a).- Que su pretensión la ha fundado en el fraude a la ley, al mal utilizarse la cobertura de la persona jurídica, puesto que tanto Pesca Cisne S.A., Alcimar S.A. (ésta última armadora del Maya V), Credraff Associates (armadora del Maya V igualmente), Bacamar S.A., (accionista de Pesca Cisne S.A.) y Empresa Pesquera Piñeiro S.A. (también accionista de Pesca Cisne S.A.), son una misma empresa, debido a que tienen mismos socios, gerentes, representantes; registran domicilios comunes y tienen además la misma calle, ciudad y país; lo cual está acreditado en autos. Agrega, que lo cierto es, que la familia de Florindo González Otero (Serafín, Florindo, Jesús, María José, todos de apellido González Corral, además de la madre Josefa Corral García y otros parientes) son controladores directos, dueños y principales accionistas de las empresas pesqueras denunciadas en este proceso ya sea por sí directamente o por intermedio de otras personas jurídicas (Piñeiro y Bacamar), según mérito de autos. b).- Argumenta que develado el mecanismo de funcionamiento de la demandada, ha quedado al descubierto que se trata de la misma empresa, cita el artículo 4 del Código del Trabajo. En el caso sub-lite, la identidad legal de la empresa está dada por una dirección común, puesto que ambas empresas Cisne S.A. y Alcimar S.A. tienen como representante legal al dueño accionista y controlador, don Florindo González y su hijo del mismo nombre. Explica que el juez a quo no ahondó en esta materia, y su raciocinio lo realizó por otra vía y no por la acción planteada por los actores; es decir, el sentenciador de primera instancia debía descubrir el velo societario para determinar la forma en que opera el demandado

en Chile, así como sus accionistas y representantes; pues de esta manera habría colegido que se abusa de la persona jurídica para burlar los derechos de terceros, en este caso, los de los actores. c). En conclusión pide al Tribunal superior que acoja la apelación y enmiende con arreglo a derecho el fallo de primera instancia, revocando y dictaminando que sea ha constatado la existencia de responsabilidad civil de la empresa demandada Pesca Cisne S.A. en virtud de haberse acreditado que dicha empresa tiene la calidad de empleadora de los actores, por los íntimos nexos con la empresa Alcimar S.A., armadora de Maya V, estar al mando de la misma dirección, conformada por los mismos socios y dedicada a la misma actividad; lo que en definitiva está comprendido dentro del concepto de Empresa. Condenándoles a su vez al pago de la totalidad de la indemnización solicitada por el actor más los reajustes e intereses legales con costas.

SEGUNDO: Que para dilucidar este recurso, es necesario abordar el tema del abuso de la personalidad jurídica y su correlato de la teoría del levantamiento del velo. Ello, pues las instituciones de derecho civil y de derecho comercial buscan dar protección a la seguridad y transparencia en el tráfico jurídico e instar a la práctica de la buena fe. Ofreciendo además los canales para determinar la responsabilidad de los actos y el resarcimiento del daño que corresponda. También en derecho comercial moderno, tal como lo explica Arturo Prado Puga, Profesor de Derecho Comercial, en Artículo sobre Nuevas Orientaciones del Derecho Comercial, Agosto de 1994 en Apuntes del Instituto de Estudios Judiciales, existe: La búsqueda a enfatizar la titularidad sustancial de las actividades comerciales, a buscar a los verdaderos responsables, sin importar el ropaje formal o meramente nominal que ellas presentan; con esto, dice el autor, se persigue combatir lo que se conoce como el abuso de la personalidad jurídica, es decir, buscar responsabilidades por encima del uso instrumental de nombres o de sociedades de pantalla y establecer las

relaciones jurídicas directas entre los interesados cuando se ocultan para cometer fraude a la ley.

TERCERO: Que en esta misma perspectiva, el Profesor de Derecho Teodoro Rivera Neumann en el libro Sentencias Destacadas del año 2006, Editor Arturo Fermandois, año 2007, en su artículo La Protección Constitucional de la Empresa, La Individualidad Determinada y la Teoría del Levantamiento del Velo, pág. 276 y siguientes, manifiesta, que no es fácil definir el concepto de Empresa y así indica entre otros, que el Diccionario de la Lengua Española le atribuye a la empresa el carácter de unidad organizativa y la jurisprudencia ha asimilado la palabra empresa como aquella sociedad mercantil o industrial para emprender o llevar a cabo obras materiales, negocios, proyectos de importancia. Cita el artículo 3 inciso 3° del Código del Trabajo, indicando que para los efectos de la legislación laboral y seguridad social, empresa es, toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotados de una individualidad legal determinada. Continúa el autor espetando, que efectivamente la Constitución de 1980 reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica en su artículo 19 N° 21 y lo remarca en el numeral 18 de la misma disposición donde las denominó Instituciones Privadas y en el numeral 16 de dicho artículo, donde se refirió a la empresa como Entidad Singular, con la cual se realiza la negociación colectiva. Es decir, señala el articulista, la Constitución reconoce en sus disposiciones, derechos fundamentales necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, propio de un sistema basado en la libre iniciativa individual. Añade que la empresa está conformada por dos o más personas naturales o jurídicas y que surge del ejercicio del derecho de asociación, consagrado en el artículo 19 N° 15, inciso primero de la Constitución; lo que conlleva el surgimiento de una identidad propia, esto es un grupo intermedio. Acotando esta Corte que también están reconocidos dichos grupos, en

el artículo primero de la misma carta fundamental. Ello conlleva necesariamente la obligación del Estado de respetar su individualidad natural o jurídica, ya que se constituye en calidad de sujeto de derechos fundamentales. Da el autor en este punto la siguiente definición de empresa: "La empresa es un organismo porque es un ente con vida propia, despersonalizado y diferente de su dueño o propietario frente al cual, pese al estrecho vínculo que los une, debe considerarse como una estructura independiente ya sea que hayan uno o muchos dueños. El esquema no varía en ese sentido, la empresa y dueño constituyen unidades distintas y separadas, tanto para los efectos legales, contables y administrativos.

CUARTO: Que sin perjuicio del resumen anterior, el citado publicista asevera que la creación de una asociación, al actuar como ente jurídico capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representado judicial y extrajudicialmente, debe constituirse de conformidad a la ley; agregando que la Constitución prohíbe únicamente las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y al orden del Estado, artículo 19Nº 15 de texto Fundamental. Puntualiza que es claro que el elemento consustancial de toda asociación es su derecho a la individualidad, esto es, ser una entidad propia, diversa de otras, con derecho a no ser fusionada o confundida con una distinta. Ahora bien, y en lo que atañe a este recurso, no obstante el reconocimiento constitucional de la empresa y su individualidad ya expuesta, la tendencia moderna- para evitar abusos- es analizar el principio de la primacía de la realidad y la doctrina del levantamiento del velo. Esto debido a que la empresa al asumir una forma jurídica asume un nombre, razón social o denominación, un domicilio, nacionalidad, capacidad, un patrimonio, diferenciados de sus miembros. En este sentido, dicho autor esgrime que puede suceder, que se dé un mal uso de la personalidad jurídica; que pueda redundar en la comisión de ilícitos, fraudes al derecho o actos reñidos con la buena fe. Así se pueden cometer fraudes respecto de terceros

valiéndose de una persona jurídica, utilizando atributos formales de la entidad, como una careta que entrampe la actividad del juez y le dificulte alcanzar a los verdaderos perpetradores del hecho punible. Explica el profesor aludido, que se dice en estos casos entonces, que los atributos de la personalidad jurídica constituyen un velo que oculta el verdadero estado de cosas, por ejemplo, los verdaderos socios, monto del haber social, dirección de la empresa, que es distinto al que se muestra al exterior, a todas luces falso o bien aparente. Como respuesta a los problemas antedichos, la jurisprudencia anglosajona dio origen a la teoría del levantamiento del velo que se define de la siguiente forma: Técnica judicial en virtud del cual, es lícito a los Tribunales en ciertas ocasiones ignorar o prescindir de la forma externa de la persona jurídica, para con posterioridad penetrar en su interior a fin de develar los intereses subyacentes que se esconden tras ella y alcanzar a las personas y bienes que se amparan bajo el velo de la personalidad, con el objeto de poner fin a fraudes y abusos mediante la aplicación directa de las normas jurídicas a los individuos que pretendían eludirlas y la declaración de inoponibilidad de la persona jurídica respecto de los terceros que resulten perjudicados. Esto se ha fundado en razones de equidad, buena fe, transparencia en el tráfico jurídico, prevención de simulación y en la sanción del fraude, precisando que es un instrumento judicial interpretativo. Destaca el articulista que también la Corte Suprema en sentencia Rol 1.929 de 21 de julio de 2006 ha utilizado esta técnica interpretativa y por otro lado estos sentenciadores de mayoría, lo observan en fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción en Rol 2.775 de 4 de diciembre de 2002. El Máximo Tribunal ha dicho: Mantener a ultranza la separación entre socios y sociedad utilizando su personalidad jurídica puede conducir a situaciones que repugnan el orden jurídico y que no pueden servir de pretexto para vulnerar las leyes. Por ello la doctrina y la jurisprudencia comparada han reconocido la necesidad en estos casos de levantar el velo, esto es, desconocer la personalidad jurídica (doctrina que coincide con la primacía de la realidad, precisamente cuando se abusa

de ella). Explica Ribera, que el juez realiza en realidad una operación de conocimiento, observando: 1. Si la situación jurídica societaria equivale a la situación real subyacente. 2. La situación patrimonial 3. La Dirección de la empresa. 4. Los socios integrantes y otros. Si comprueba que hay fraude o abuso, el Juez hará primar la realidad de la situación jurídica existente en el substratum de la entidad, levantando el velo presentado al exterior. 5. Si el juez advierte que los actos aparentes conllevan uno o más actos contrarios a derecho mediante el abuso de la forma de personalidad jurídica, la imputación de los derechos, obligaciones y responsabilidades no se debe hacer a la sociedad sino directamente a los socios, prescindiendo o pasando por alto la personalidad jurídica atribuida. Reiterando que el desconocimiento de la personalidad jurídica se puede expresar mediante diferentes formas, inoponibilidad u otras, pero tiene un carácter ?eminentemente restrictivo y excepcional que sólo justifica su aplicación ante ilícitos y fraudes al derecho.

QUINTO: Que sobre lo expuesto entonces y haciendo una síntesis de este marco conceptual, es claro que la empresa está reconocida en nuestra carta fundamental, pero el uso de ella, debe ser para dar seguridad y transparencia en el tráfico jurídico (civil y comercial), y en sus actuaciones, debe primar la buena fe; asumiendo además su responsabilidad y reparando los daños a que hubiere lugar. Cuando se abusa de la personalidad jurídica a través de fraudes al derecho o actos reñidos con la buena fe, existe un proceso desnaturalizador de la Institución, entonces, se puede hacer uso de la técnica judicial del levantamiento del velo, que coincide además con el principio de la primacía de la realidad; teoría esta, que ha sido acogida por nuestra Corte Suprema. Para ello entonces, los Tribunales tienen que hacer una operación de conocimiento, observando la situación jurídica de dicha sociedad, a fin de poder imputar derechos, obligaciones y responsabilidades a los causantes de los perjuicios.

SEXTO. Que del mismo modo, es necesario indicar que el actor tanto en su demanda como en la apelación, esgrimió como argumento principal, que la demandada hizo abuso del ropaje formal de la personalidad jurídica para evadir la ley y no responder de los perjuicios. Este argumento es muy importante, pues antes de entrar al análisis de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, es esencial establecer si efectivamente la empresa -objeto de la acción- hizo un mal uso de la personalidad jurídica que la ampara. Si es negativo, entonces es muy poco lo que se puede razonar sobre lo anterior; en cambio, si efectivamente abusó de la estructura de la personalidad jurídica, los requisitos de la responsabilidad extracontractual, pueden ir cumpliéndose uno a uno. Además, en esta misma perspectiva, caería toda la fundamentación que reiteradamente ha dado la empresa litigante, esto es que no tiene responsabilidad alguna, pues su labor ha consistido en ser un gestor de negocios ajenos.

SEPTIMO: Que aclarado lo precedente, corresponde verificar si efectivamente la empresa sub-lite ha incurrido en un abuso de la personalidad jurídica. Del estudio de la causa y a propósito de lo antes razonado, se desprende lo siguiente: 1.- que la empresa Pesca Cisne S.A., según fs. 161 se constituyó el 4 de abril de 1988, teniendo como socios fundadores a Florindo González Otero, Florindo González Corral y José Carballo Eire, acta de constitución que rola a fs. 424. Documentos además que corresponden a parte de los exhibidos a fs. 388 y siguientes, guardados en custodia. Encontrándose además, Acta de Sesiones de Directorio, Registro de Accionistas y Junta ordinarias y extraordinarias de Accionistas. En ese mismo sentido a fs. 46 en la duplica, se indica que la conformación de Pesca Cisne S.A. era la siguiente: Pesquera Piñeiro S.L. 2850 acciones; Bacamar S.A. 2280 acciones, Florindo González Otero 700 acciones, Jesús González Corral, 3 acciones; María González Corral 3 acciones y Florindo González Corral 2 acciones. Asimismo, hay que señalar como consta a

fs. 428 que el 4 de abril de 1989 se suscribe la sesión de directores N° 2, en ella se designa como nuevo Gerente General y Director a Florindo González Corral, aprobada esta nominación por la unanimidad del directorio a propuesta de su expresidente, don Florindo González Otero. Se designó como Director a Jesús González Corral, ambos con amplias facultades enumeradas en dicha acta, sin limitación alguna, haciendo radicar en su persona además, las facultades de administración de inversión, de decisión y facultades judiciales. Se confirió poder a Salvador Villanueva Fernández. En Igual sentido se observa en los documentos exhibidos a fs. 388, guardados en custodia. A fs. 431 rola acta de sesión extraordinaria de Pesca Cisne S.A. de fecha 27 de septiembre de 2005, en ella se renuevan los poderes a los señores Florindo González Otero, Florindo González Corral, Jesús González y Adolfo Suris Riobo en su carácter de Gerente Zonal de Pesca Cisne S.A. ;De la misma forma se aprecia en los documentos exhibidos a fs. 388, guardados en custodia. 2.- Por su lado la empresa uruguaya Alcimar S.A. según documento de fs. 158 tiene domicilio en calle Paraguay N° 1674, oficina 108 de Montevideo, constituyéndose el 8 de enero de 2003 y figuran como socios José Manuel Salgueiro López, quien es Vicepresidente desde el 21 de mayo de 2003 y Florindo González Corral, quien asume la calidad de Presidente desde mayo de 2003, ambos en calidad de representantes con amplias facultades. Mismos datos que se aprecian en el oficio de fs. 660 del Director de Política Consular de Chile.

OCTAVO: Que en cuanto a la empresas Piñeiro S.L., Bacamar S.A. Y Credraff Associates S.A., según fs. 658 por oficio 17210 del Director de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, se informa que Empresa Piñeiro S.L. y Bacamar S.A. figuran con el siguiente domicilio social, calle San Francisco N° 47, localidad 36202, Vigo, Pontevedra. Bacamar S.A. registra una participación del 41% de Pesca Cisne S.A. desde de 1997; Credraff Associates S.A. se encuentra ubicado en Vigo, Pontevedra y el número

telefónico es el mismo de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. Empresas estas que tienen el mismo domicilio, la misma fecha de constitución, idéntica actividad comercial y su capital es similar, destacando que ambas empresas tienen en conjunto más del 90% de las acciones de Pesca Cisne S.A. sus administradores, dirigentes y socios pertenecen y están dirigidos por una familia constituida por Florindo González Otero, su cónyuge Josefa Corral García, madre y cuatro hijos. A fs. 741, rola oficio de la Oficina Central Internacional INTERPOL Santiago, de 11 de enero de 2007 indica que la sociedad Credraff Associate no existe en el domicilio citado en calle Real N° 52 de Vigo, que las sociedades pesqueras Bacamar y Piñeiro tienen su domicilio en calle San Francisco N° 47 de Vigo, Pontevedra, sociedades con los siguientes datos: Bacamar S.A. accionistas Serafín, Florindo, Jesús y María José, todos de apellido González Corral y don Florindo González Otero. Piñeiro S.L. tiene como accionistas a Florindo González Otero y Josefa Corral García. El Consejo de Administración está integrado por ambos socios además de Serafín, Florindo, Jesús y María José, todos de apellido González Corral. Mismos antecedentes sobre domicilio, constitución capital, administradores y representantes se verifica en los documentos exhibidos a fs. 388, guardados en custodia.

NOVENO: Que según lo razonado, los elementos comunes de las empresas Pesca Cisne S.A., Bacamar S.A., Piñeiro S.L., Creedraff Associate S.A. y Alcimar S.A. son los siguientes: a) Pesca Cisne S.A., Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. están constituidas por las mismas personas, la familia formada por el matrimonio entre Florindo González Otero y Josefa Corral García y sus hijos Serafín, Florindo, Jesús y María José. Ahora bien, Pesca Cisne tiene como socio mayoritario a Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. pero estos tienen la misma composición social, familia González Corral. b) La Gerencia y Administración de estas empresas está a cargo de los miembros de la familia González Corral, ya indicada. c) Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. tienen el mismo domicilio y los mismos teléfonos en la localidad de

Vigo, Pontevedra. d) Creedraff Associate S.A., registrada en la República de Panamá como empresa, inscripción que rola a fs. 662, pero según oficio de fs. 658 del Director de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores esta empresa está ubicada en Vigo, Pontevedra y su número telefónico es el mismo de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. Así por otra parte, se desprende del documento de fs. 222, que indica en la información comercial de esta empresa, que es posible ubicarla en Vigo, Pontevedra y el contacto es José Manuel Salgueiro, mismo teléfono de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L., esto es 986433667, según oficio de fs. 658. e) El centro de funcionamiento de estas empresas es la localidad de Carballiño, localidad de Ourense en Galicia, España. El informe de INTERPOL de fs. 741 indica los socios de esas empresas, individualizando los domicilios en dicha localidad; ahora bien, lo importante es que las actas de directorio que se han acompañado y copias de los mandatos de estas empresas españolas para surtir efecto en Chile aparecen otorgados en dicha localidad; así se aprecia a fs. 431 en acta de sesión extraordinaria de Pesca Cisne S.A., el cual reza el siguiente tenor: "En la ciudad de Carballiño, reino de España, siendo las 9:00 horas, del día 8 de septiembre de 2005, en las oficinas ubicadas en calle Cuatro Caminos 7 de dicha ciudad se reunió el Directorio de Pesca Cisne S.A. con asistencia de los directores señores Florindo González Otero, Jesús González Corral y Florindo González Corral?"; a fs. 445 hay un mandato expedido por Serafín González Corral en representación de Bacamar S.A. individualizado con domicilio en Vigo, calle San Francisco y otorga poder amplio suficiente al abogado chileno Ramiro Méndez Urrutia. A fs. 448 rola poder de Pesquera Piñeiro S.L. otorgado en Carballiño, España por don Florindo González Otero, quien comparece en representación de dicha sociedad y otorga poder al mismo abogado chileno. También estos antecedentes se verifican en los documentos exhibidos a fs. 388, guardados en custodia.

DECIMO: Que la vinculación entre Alcimar S.A. con Pesca Cisne S.A. se desprende del documento de fs. 158 en que el Presidente del directorio de Alcimar S.A. y su representante, además de socio es Florindo González Corral y el Vicepresidente es José Manuel Salgueiro, quien según aparece a fs. 222 figura como contacto de Creedraff Associate S.A. y el teléfono tal cual se indicó es el mismo de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. Corroborando lo anterior, la información de Internet de fs. 231 y el oficio ya citado del Ministerio de Relaciones Exteriores de fs. 658. Complementa, esta vinculación, lo expuesto por la demandada a fs. 25 en que la señala que José Manuel Salgueiro es amigo personal de Gerente de Pesca Cisne José Manuel Suris Riobó.

UNDECIMO: Que para estos sentenciadores de mayoría, de la prueba antes expuesta, es posible y de acuerdo al marco conceptual dado en los motivos precedentes y tal como lo permite el artículo 1712 del Código Civil, se aprecia un conjunto de presunciones, graves precisas y concordantes, que permiten acreditar que efectivamente existe un conjunto de empresas o bien un conglomerado que tiene entre sus socios y accionistas a la familia conformada por Florindo González Otero y Josefa Corral García y sus cuatro hijos Florindo, Serafín, Jesús y María José González Corral. Estas empresas son Pesca Cisne S.A., Pesca Piñeiro S.L., Bacamar S.A., y relacionados con ellas Creedraff Associates S.A. Dicha familia aparece además en las citadas empresas, como administradores, dirigentes y socios de la siguiente forma: Florindo González Corral, Presidente y José Manuel Salgueiro López, Vicepresidente en Alcimar S.A.; Gerente General y Director Florindo González Corral, Director Jesús González Corral en Pesca Cisne S.A.; también se dan poderes a Florindo González Otero, Florindo González Corral, Jesús González Corral y Adolfo Suris Riobo como Gerente General de Pesca Cisne S.A. Además Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. tienen el mismo domicilio y los mismos teléfonos en la localidad de Vigo, Pontevedra y en el caso de Creedraff Associate S.A., según oficio de fs. 658 también tiene su domicilio en Vigo,

Pontevedra y su número es el mismo que Bacamar S.A. y Piñeiro S.L., más aún a fs. 222 la información comercial de esta empresa señala como contacto a José Manuel Salgueiro, mismo teléfono de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. y su núcleo de funcionamiento es la localidad de Carballiño, Ourense en Galicia, España. De la misma forma Florindo González Otero, según documentos exhibidos a fs. 388, guardados en custodia, aparece como representante legal de Bacamar S.A. y Piñeiro S.L. Luego, se puede establecer que estas empresas responden a una misma voluntad y se trata de una única organización, que opera principalmente entre España, Chile y Uruguay, alternativamente en la República del Panamá, dedicados a negocios pesqueros.

DUODECIMO: Que siguiendo con lo ponderado, esto es, que existe una estrecha relación entre las sociedades indicadas en especial entre PescaCisne S.A. y Alcimar S.A., es permitido entonces a los sentenciadores utilizar la técnica del levantamiento del velo. Ello porque en convicción de esta Corte existen al tenor del artículo 1712 del Código Civil, presunciones graves, concordantes y precisas que Pesca Cisne S.A., y las empresas asociadas han mal utilizado las instituciones que otorga el ordenamiento jurídico, utilizando la estructura forma I de la personalidad jurídica para atentar contra la buena fe, la seguridad y transparencia del tráfico jurídico, abusando del derecho y evadiendo de esta forma las responsabilidades y obligaciones que le corresponden de acuerdo a la ley; en virtud de ello estos sentenciadores llegan a la conclusión que Pesca Cisne S.A. es parte del conglomerado de las empresas - ya señaladas - formadas por la familia Florindo González Otero, y Josefa Corral García y sus cuatro hijos Jesús, Florindo, Serafín y María José González Corral; es decir, no es efectivo que Pesca Cisne S.A. haya realizado casi en forma azarosa, eventual, transitoria un encargo de negocios ajeno, lo que ha realizado simplemente son negocios propios- una conducta dentro de su giro, que corresponde a todo este conglomerado- que es una única empresa- con una voluntad, domicilio, administración y dirección

común como ya se ha señalado, dedicado al giro de la pesca. Realizado entonces el levantamiento del velo, antes expuesto, es claro que la conducta de la empresa demandada es ampararse en la estructura de la personalidad jurídica para evadir el derecho y las responsabilidades que le corresponden.

DECIMOTERCERO: Que de acuerdo a la prueba de autos, a criterio de estos sentenciadores de mayoría, no es posible que la propia demandada en sus diferentes escritos de contestación, duplica y durante los alegatos, en igual forma el Gerente General de Pesca Cisne S.A. a fs. 351, José Adolfo Suris Riobo y lo mismo Eliana Coyopae Montiel a fs. 374 y siguientes desconozcan como Gerente o representante de Pesca Cisne S.A. el nombre de Florindo González Corral o que bien indiquen que no conocen la verdadera relación entre pesca Cisne S.A. Y Alcimar S.A. y que solo exista una relación de amistad, toda vez que desde el año 1989 llevan trabajando en dicha empresa. Ahora bien, desde los primeros escritos de la contestación de la demanda, hasta la vista en segunda instancia, la demandada ha insistido en que no tiene responsabilidad alguna en los hechos. **Pero sucede que el mal uso de la estructura de la personalidad jurídica se aprecia de la siguiente forma:**

1. Se efectúa un llamado a diferentes trabajadores para en definitiva, trasladarlos y embarcarlos en una nave Maya V en otro país a fin de realizar actividades pesqueras.
2. A fin de salvaguardar todo tipo de responsabilidad la empresa demandada insiste en que ella sólo es un correo en esta labor o técnicamente un gestor de negocios ajenos.
3. Bajo esta actitud, está utilizando la estructura de la personalidad jurídica, puesto que como ha quedado demostrado no obstante ser una misma empresa con voluntad y administración común; Pesca Cisne

S.A., elude las normas legales y las traslada a la empresa en el extranjero, quedando entonces los trabajadores en absoluta indefensión.

4. La estructura de la personalidad jurídica no es para evadir la seguridad y transparencia jurídica, todo debe tener un fin lícito y realizarse de buena fe, dando además confianza y estabilidad al tráfico jurídica en las relaciones civiles y comerciales.

5. Utiliza asimismo la estructura y ropaje de la personalidad jurídica, manteniendo distancia de los hechos, al decir que prestó ayuda humanitaria, y que por encargo de otra empresa, seguía depositando en las libretas del Banco Estado la remuneración; que la ayuda de la señora Eliana Coyopae sigue siendo sólo de gestión de negocios ajenos.

6. Pesca Cisne S.A. como parte de la empresa constituida a través de varias sociedades de la familia González Corral debe responder civilmente por el hecho de ser parte de ese conglomerado- que es una empresa única- y haber puesto en el barco Maya V a los demandantes de esta causa. No puede esconderse detrás del velo de la personalidad jurídica y decir que es una sociedad independiente, que no tiene relación alguna con las demás empresas y que sólo las conoce por vínculos de la actividad pesquera, en circunstancias que quedó demostrado que Pesca Cisne S.A. es una más, de las sociedades del conglomerado de la familia González Corral- que es una empresa única-.

7. Que por otro lado, se hace abuso de la estructura de la personalidad jurídica al señalar la demandada que Alcimar S.A. realizó reembolsos de gastos a Pesca Cisne S.A. respecto a los pasajes en avión, alojamiento y todos los otros gastos inherentes para que los actores llegaran a bordo del Buque Maya V y durante su estadía en Australia.

Lo anterior, al contrario de lo que dice la demandada no es ayuda comercial, no es acción humanitaria, sino que es abusar de la personalidad jurídica, pues de esta forma, si bien aparentemente aparece como una ayuda, lo cierto es que se hace creer a los actores y a los sentenciadores que son sociedades independientes, situación que no es efectiva, como ya ha quedado demostrado. Además, si tal como lo expresa el actor, la demanda fue interpuesta el 28 de marzo de 2005 y el reembolso de gastos que alega Pesca Cisne S.A. se realizó como lo informa el perito a fs. 592, recién el 5 de abril de 2005, esto es, días después de interpuesta la demanda. En ese mismo sentido, el informe pericial confirma que ha existido un abuso de la estructura de la personalidad jurídica, pues aparte de lo ya expuesto, y como lo señala el perito, no todos los gastos de traslado están relacionados con la causa. Ahora bien, lo importante es señalar que se quiere deslindar responsabilidad, como por ejemplo, abriendo cuenta de gastos por recuperar u otras parecidas. Si existe sólo una relación azarosa o circunstancial- entre Pesca Cisne S.A. y Alcimar S.A., lo que no es efectivo, no se entiende el grado de compromiso en todas las actividades y el desembolso efectuado por Pesca Cisne S.A. Sólo razonablemente es posible entender, si en realidad es una misma empresa, como ha quedado acreditado en este proceso; no siendo difícil entonces con las actuales herramientas modernas financieras y bancarias, realizar un traspaso de un Banco a otro, entre empresas

8. Que la prueba de la demandada, tanto documental, y en especial testimonial, como la absolución de posiciones que rindieron los actores, en nada arredra lo expuesto por estos sentenciadores de mayoría, puesto que su hilo conductor a través de las diferentes argumentaciones y preguntas, es insistir que Pesca Cisne S.A. por un acto ocasional, transitorio, fue sólo gestor de negocios ajenos; que ellos no han firmado contrato con los trabajadores y que los hechos habrían ocurrido en aguas australianas. Pero, esa no es la reflexión que se debe realizar en esta causa, la pregunta a responder es las

estructuras de la personalidad jurídica de la demandada y las empresas asociadas fueron utilizadas de buena fe para la transparencia y seguridad del tráfico jurídico, o derechamente han tratado de evadir la reparación de un daño causado que corresponde resarcir. La respuesta es clara, han evadido el derecho a través de diferentes artilugios para no responder de la responsabilidad civil extracontractual que corresponde en este proceso, pues la demandada y las demás sociedades, como ha quedado probado, son en definitiva, una única empresa.

DECIMOCUARTO: Que es imprescindible para poder fallar adecuadamente esta causa, indicar en lo que atañe a este proceso, que el artículo 10 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales establece en relación a estos últimos, que reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión; norma que está ratificada en el artículo 76 inciso 2° de nuestra Carta Fundamental. En esta misma línea el artículo 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil describe que la sentencia debe contener la enunciación de las leyes y en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Se agrega a lo anterior el artículo 24 del Código Civil, en cuanto establece que también se puede recurrir al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Ahora bien, es nítido observar, que la tendencia actual en materia de responsabilidad, tiende a unificarse y se habla del derecho de daños, más allá si este es contractual o extracontractual. De la misma forma, el artículo 2314 del último Código citado, con absoluta claridad nos señala que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Lo esencial, es que si efectivamente se produjo un daño a las víctimas, estas deben ser reparadas, atendido además lo que establece el artículo 19N° 1 de la Constitución Política, pues este

cuerpo jurídico, nos asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; siguiendo para obtener dicha reparación, obviamente un justo y racional procedimiento; como ha sido este proceso, en que ambas partes han tenido la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

DECIMOQUINTO: Que a estas alturas del fallo, corresponde examinar los requisitos de la responsabilidad extracontractual y no antes, bastando que el actor se refiera a dicha responsabilidad, para luego los sentenciadores de mayoría, engarzar en las hipótesis que establece la ley, de acuerdo además al principio IURIA NOVIT CURIA; esto es, el Tribunal conoce el derecho. Del mismo modo, nadie rebate hoy que las personas jurídicas son capaces de delito o cuasidelito civil. En esta perspectiva y en relación a los requisitos de la responsabilidad extracontractual, puede razonarse que: 1. Acción libre de un sujeto capaz. Está comprobado y no ha sido discutido por la demandada, que el Capitán del Maya V ingresó a aguas australianas para realizar una pesca ilegal, como se aprecia en el documento agregado a fs. 245, 246 y 249 y siguientes, acción que realizó en forma libre, no obstante que el buque Maya V, como lo ha expresado la demandada, y se observa en los documentos citados, contaba con todos los medios técnicos para realizar la pesca en mar abierto. 2. Que dicha acción sea realizada con dolo o negligencia. Según lo que se ha relatado, efectivamente dicha acción ha consistido en una negligencia del Capitán del Buque Maya V, puesto que como se ha reiterado por la parte demandada en sus escritos, el buque tenía todos los mecanismos, antena, radar, para no ingresar a aguas jurisdiccionales de otros países, donde no puede realizar explotación de recursos pesqueros; pero lo cierto es que realizó dicha conducta, existiendo entonces negligencia de su parte como se desprende además del documentos de fs. 249 y siguientes, no sólo por lo que se menciona en esos documentos, sino que por su preparación profesional, debió no incurrir en ese descuido o imprudencia. 3. Que la víctima haya sufrido

un daño. Según los documentos citados a fs. 249 y siguientes y lo expuesto además en la Prensa Austral a fs. 239 y siguientes y lo manifestado por la demandada en sus escritos de réplica y duplica, y en sus alegatos; no está discutido que efectivamente los demandantes sufrieron daño, pues ellos se encontraban como tripulantes en el Maya V, y producto del hecho negligente cometido por el Capitán de dicho buque fueron apresados, detenidos, dejados en un recinto penitenciario, condenados y expulsados de Australia. Situación que por sí misma constituye un daño no sólo para los actores, sino para cualquier persona, porque lo natural, es estar en libertad y en condiciones normales ningún trabajo consiste en realizar acciones ilícitas, ser apresado y ser condenado. 4. Que exista una relación de causalidad entre la acción culpable y el daño causado. La relación de causalidad se aprecia claramente. Es producto de la acción del Capitán del Maya V- acción negligente- que los demandantes sufrieron los daños explicados precedentemente. No hay otra circunstancia, que nos señale en las pruebas del proceso, que el daño sufrido por los actores se refiera a otro motivo que no sea la actuación negligente del Capitán del Maya V. Aclarado lo anterior, debe precisarse, que dicho Capitán del Maya V es empleado de la empresa Alcimar S.A., empresa que es parte del conglomerado de la familia González Corral- empresa única- según se ha explicado. Ahora bien, la responsabilidad de la empresa conformada por dicha familia y en este caso entonces, por la demandada Pesca Cisne S.A., corresponde a la extracontractual; esto es responsabilidad por el hecho ajeno; establecida en el artículo 2320 del Código Civil. En efecto, existe efectivamente un vínculo de dependencia entre el Capitán de la nave Maya V y la empresa Alcimar S.A., parte del conglomerado señalado,- que constituye una única empresa- puesto que Alcimar S.A. es la encargada de seleccionar, dar órdenes, impartir instrucciones sobre las actividades a dicho Capitán. Asimismo, la empresa responde, porque ella es la encargada de seleccionar y capacitar sus dependientes. En esta misma línea, siguiendo a Cristián Aedo en su obra Responsabilidad

Extracontractual, Editorial Librotecnia año 2006, Pág. 232, quien cita a Alessandri, indica que: En realidad es incorrecto hablar de responsabilidad por el hecho ajeno. El que tiene bajo su cuidado o dependencia a una persona que causa un daño no responde por el hecho de esta, sino por el suyo propio, cual es la falta de vigilancia que sobre ella debía ejercer, su responsabilidad proviene de su propia culpa. Es esta la que obliga a reparar su propio daño. Y el profesor Hernán Corral en la misma página señala: La atribución de responsabilidad se fundamenta en el deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. Por tanto no se responde sólo por la culpa ajena, sino también por la propia, que consiste en faltar a esos deberes.

DECIMOSEXTO: Que en consecuencia, en convicción de los sentenciadores de mayoría, reuniéndose todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual, procede dar lugar a la demanda interpuesta por los actores. En cuanto a la evaluación del daño moral, y atendido que los actores fueron apresados en territorio extranjero, fueron condenados, expulsados de ese país, además de no poder por varios meses estar con sus familias y el haberse envuelto en una situación ilícita que ellos no causaron; hace a estos magistrados de mayoría, fijar el daño moral para cada trabajador en la suma que realmente represente un resarcimiento, una compensación, a ese daño causado.

PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los 3 del Código Orgánico de Tribunales; 19N° 1 y 76 de la Constitución Política de la República artículos; 20 a 24 del Código Civil; 170, 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, Se Declara:

I.-Que se Revoca la sentencia dictada a fs. 776 y siguientes, el veintiséis de septiembre de dos mil siete, que rechazó la demanda

interpuesta en lo principal de fs. 1, y en su lugar se declara que se acoge la misma, sólo en cuanto se condena a la demandada Pesca Cisne S.A., representada legalmente por Adolfo Suris Riobo a pagar a cada uno de los actores por indemnización de perjuicios a título de daño moral la cantidad de US\$25.000.- (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en moneda nacional, al momento efectivo del pago.

II.- Que no se condena en costas a la parte demandada por no haber sido totalmente vencida y tener motivos plausibles para litigar. Acordada con el voto en contra del Sr. Ministro Fáundez, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada en todas sus partes; pues en su concepto no es posible dar lugar a la demanda de los actores, toda vez, que no se reúnen los requisitos de la responsabilidad extracontratual, tal como se esgrime en el fallo de primera instancia. Redacción del Ministro Suplente Sr. Mesa y la disidencia por su autor. Regístrese y devuélvase, con los agregados tenidos a la vista.

Rol Civil N° 230-2007.